



Argentina: Nación Sitiada

Por Julio M. Shiling

Cuándo Ana María González visitó la casa de su amiga colegial, María Graciela Cardozo, para situar en la cabecera de la cama del padre de ésta, la bomba, que horas después, volaría los sesos del jefe de la policía de Buenos Aires ¿se imaginaría ella que aún faltarían 27 años más antes de alcanzar el poder? El horrorífico acto cometido ese 16 de junio de 1976, por la adolescente asesina montonera tipificó la violencia indiscriminada desatada para promover la premisa marxista de la lucha de clases que, formalmente se había iniciado, en ese momento, 21 años antes.

Hoy 3 años después de las elecciones del 2003, y 48 desde que John William Cooke, activista de ideas híbridas nacionalistas-marxistas-leninistas, diera comienzo en septiembre de 1955, con la "Resistencia Peronista", a la guerra por comunizar la patria de San Martín, vemos a la república Argentina cada vez encaminada a su esterilización como sociedad libre. Antes de entrar en el examen de lo transcurrido y la presidencia de Néstor Kirchner, es obligatorio un re-encuentro de los hechos como ocurrieron y las ideas que sostienen esa trayectoria que hoy goza de un apogeo oficialista.

El discutir los méritos del marxismo como concepto abstracto, no es el propósito de ésta, pero un entendimiento básico del mismo es fundamental para comprender el proceso que ha vivido y vive la Argentina (y otros lugares). El marxismo, como el nacional socialismo (nazismo), son ideologías deterministas. Ven el desarrollo del mundo como siguiendo unas "leyes", que se manifiesta por medio de "luchas". El nazismo interpreta una supuesta "leyes de naturaleza" que se materializa en una "lucha de razas". Para el marxismo todo sigue "leyes de historia" y se despliega en una "lucha de clases".

Adeptos a estas doctrinas se consideran agentes encargados en asistir a estos "procesos", traducidos por ellos, como inmutables. De ahí que los nazistas, utilizan la práctica de eliminar al no-ario como colaboración meritoria con la naturaleza. Los comunistas también abrazan la ejercitación del exterminio, en este caso de clases (social, política, religiosa, cultura o ideológica), como prerrequisito para, junto a la alteración en las relaciones de producción, así alcanzar el final de la "alienación", el puerto utópico de la barca marxista y construir el "hombre nuevo".

Marx, virulentamente expresó la necesidad de fusionar la violencia con toda acción revolucionaria. Su desprecio por el pacifismo es connotado. La lucha armada revolucionaria con la intención de derrocar sistemas capitalistas violentamente, no solo era consecuente con las ideas de Marx, sino eran necesarias. Y los argentinos que creyeron y lucharon por implantar el paradigma comunista, no cometieron una herejía con la pseudo-religión que es el marxismo. Fueron fieles a la metodología que prescribió su fundador.

La lucha para convertir a la Argentina en una república socialista (no confundirse con Democracia Social) ha tenido seis periodos. Los actores fueron una amalgama de movimientos marxistas-leninistas que, aunque a veces evidenciaban antagonismos de índoles faccionistas, todos conspiraban por la comunización de Argentina. Al final terminaron reconstituyéndose o fusionándose en dos: el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y los Montoneros. La primera etapa (1955-1968) consistió principalmente en focos de guerrillas rurales donde el escenario fueron notoriamente las provincias de Tucumán, Salto y otras áreas montañosas. La gesta subversiva armada fue infructuosa en llevar a cabo ninguna contundente victoria.

La segunda etapa de 1969 a 1972 marcó una intensificación en la guerra marxista al incorporar los insurgentes a guerrillas urbanas. Esta inclusión masiva de las ciudades escaló la contienda beligerante. El secuestro, la tortura y el asesinato de el ex – presidente Pedro Aramburu en mayo del 1970, por los Montoneros, dió aviso de la sangrienta década que avicinaba a la Argentina. Notables esfuerzos por las fuerzas de seguridad en frenar la ofensiva subversiva fue el establecimiento de un marco jurídico para combatir a los comunistas como la Cámara Federal de Penal. Este instrumento legal sirvió para procesar y condenar a más de 2,000 terroristas.

El retorno de la democracia en mayo de 1973 marcó el comienzo del tercer periodo (1973-1976) de la guerra comunista por el poder estatal argentino. Teóricamente la democracia, como sistema político, es un acérrimo enemigo de un esquema doctrinal, como el marxismo-leninismo, que emplea el totalitarismo, como modo operativo. Sin embargo la voluntad de destruir la embestida comunista, por parte del nuevo presidente, Cámpora, parece no haber estado presente. El primer acto oficial del recién estrenado mandatario fue derogar la Cámara Federal Penal. Este ataque frontal al mecanismo legal para enfrentar al terrorismo y la posterior amnistía a todos los terroristas que habían sido condenados, vitalizó los movimientos antisistemas. Cámpora también desmanteló el Tribunal Supremo y entregó la Universidad de Buenos Aires en capacidad de virtual interventor, al connotado comunista Rodolfo Puiggrós (luego convertido en líder montonero). La subversión estaba galvanizada.

Los asesinatos, secuestros, atentados dinamiteros, ataques a guarniciones, bancos, etc., alcanzaron niveles inauditos. El 13 de julio, Cámpora renuncia (algo que muchos esperaban y consideraban su gesta presidencial como una premeditado preludeo para el retorno de Juan Domingo Perón al poder).

Nuevas elecciones fueron convocadas para septiembre que Perón ganó con 61% del voto. Tomando en cuenta la raíz peronista del movimiento montonero, Perón (y muchos de los que votaron por él) pensaron que el movimiento subversivo encontraría, en el mentor, un bálsamo para el apaciguamiento. Perón, igual que Cámpora antes que él, subestimó el apetito de los que estaban comprometidos con el establecer, nada menos, que un orden marxista en la Argentina. Todo esfuerzo de cooptar la subversión (y fueron muchos) resultaron infructuosos. El gran mariscal del estatismo argentino, Juan Domingo Perón, fue abandonado por esos que surgiendo de sus filas fascistas-socialistas, encontraron en el comunismo, un variante del socialismo más apetecible. El caudillo no hizo su ira callar.

La respuesta de Perón a la guerra subversiva marxista fue la Triple A. Esta organización, operando en la ilegalidad y de forma clandestina, empezó la campaña furtiva de penetrar células subversivas marxistas y neutralizar a sus integrantes. Con sólo nueve meses en el poder, Perón fallece menos de 9 meses de haber obtenidas las riendas presidenciales, muy distante de haber aminorado, o mucho menos, aniquilado a sus nuevos enemigos, antiguos discípulos. Quedó su esposa, Isabel Martínez de Perón, de presidenta.

La presidencia de Isabel inicia agresividad en la lucha contra la guerra revolucionaria en este tercer periodo que culmina en 1976 con el golpe militar. Comenzando 1975, Operativo Independencia (decreto secreto No.261), una campaña otorgando poderes amplios al ejército argentino para combatir la guerrilla comunista en Tucumán, provincia fuertemente abatida por el ERP y amenazada con convertirse en "zona liberada", fue autorizada.

La despiadada crueldad que ejercían la guerra los marxistas fue tipificado con el hallazgo en 1975 del cuerpo inerte del Teniente Coronel Larrabure secuestrado por más de un año, confinado a una fosa cavada debajo de una casa y llamada "cárceles del pueblo". Larrabure había perdido cuarenta kilos de peso durante su cautiverio y su cadáver demostraba una contusión rectangular en forma de un martillo y en el cuello, un surco de estrangulamiento por torción hacia atrás, y en los órganos genitales, congestiva inflamatoria, similar a la provocada por cargas eléctricas. El terror y la indignación nacional, ante la barbarie roja, alcanzaban proporciones desenfrenadas.

Pese al esfuerzo del gobierno de Isabel Perón de frenar la avanzada subversiva, en adición al Operativo Independencia y el decreto No. 2772 de octubre de 1975, dando mayores facultades a las fuerzas armadas a lidiar con la insurgencia, el caos no parecía debilitarse. El hecho es que las autoridades argentinas, después del decreto de Cámpora derogando la Cámara Federal Penal y la ley de amnistías indultando a más de 2,000 terroristas, nunca recobraron el terreno ganando a los guerreros comunistas. No es casualidad que más del 52% de los actos terroristas y el 70% de los asesinatos, fueron llevados a cabo durante democracia, entre 1973 y 1976.

El cuarto periodo (1976-1979) de la guerra comunizadora se desprende a partir del golpe militar de marzo de 1976. Le llamó "golpe militar" por la ascendencia al ejecutivo del estado argentina, la junta militar precedida por Jorge Videla, Massera, et al., y la manera no-democrática de llegar al mismo. Pero la realidad es que fue, más bien, un golpe "cívico-militar, ya que había el reclamo popular por la acción pretoriana interventora y tenía el amplio respaldo de la mayor parte de la rama legislativa multipartidista y judicial de la nación argentina. La sociedad civil abrumadoramente, y con generoso entusiasmo, reforzó moralmente la acción castrense. Esto incluye a personalidades de la izquierda como Jacobo Timmermann, Ernesto Sábato, etc., con este último rindiendo impresionante loas al "libertador" Videla. De haberse realizado elecciones libres en ese momento ante la crisis existente, con gran probabilidad, hubiera rendido tal vez la mayoría más decisiva en la historia de elecciones argentinas.

La misión de la junta militar de 1976 fue la de neutralizar la ofensiva marxista, sus acciones terroristas, y poner fin al proyecto de establecer una república comunista en América del Sur. Su preocupación no fue en ganar concursos de popularidad, y eso fue, indudablemente, un gran error estratégico. El reto que enfrentaban fue enorme. Los combatientes marxistas representaban la fuerza insurreccional más grande en el hemisferio occidental en ese momento. Su modo no-convencional de desarrollar una guerra de guerrillas, rurales y urbana, dificultaba la tarea de combatirlos. No obstante la ferocidad y el poder de la ERP, los Montoneros, la tiranía castrocomunista, el comunismo internacional, la izquierda radical y sus respectivos simpatizantes, las fuerzas de seguridad argentinas ganaron, en tres años, la contienda bélica, y restablecieron el orden.

La lucha marxista-leninista por el poder, con su empleomanía del terror armado, se llevó a cabo entre 1955 y 1979. Su costo a la sociedad argentina fue enorme. Esta atroz guerra para imponer un sistema sobre la mayoría, por una minoría, elitista y fanática, que obedecía a una ideología radical, atea e intolerante, colectivizó el luto y el caos. ¡Solo entre 1969 y 1979 hubo 21,642 actos terroristas ejecutados por los comunistas! La derrota militar aplastante que sufrieron los combatientes marxistas, llevó a la dirigencia subversiva a cambiar de campo de batalla. La despreocupación del régimen militar por el reino de las imágenes y percepciones, probó al final, ser un error colosal sobre el cual el enemigo capitalizó.

La quinta etapa (1980-2003) recorre la parte final del mandato castrense, después de ganar la guerra bélica en 1979, recorre el retorno a la democracia, con las presidencias de Raúl Alfonsín, Carlos Menem y concluye con la ascensión al poder del actual mandatario. La cúpula marxista argentina, y sus cómplices revolucionarios internacionalistas, no cesaron sus afanes conspirativos para, en la tierra donde nació Sarmiento, instaurar una dictadura socialista. La metodología para conquistar el poder, cerradas las puertas de la vía armada, resultó ser el terreno de la opinión pública en las capitales del mundo occidental capitalista.

La guerra roja publicitaria abrazó la premisa difusionista de Hermann Goebbells, Ministro de Propaganda de Hitler, la de repetir una mentira suficiente veces hasta convertirla, en la opinión pública, en una "verdad". El proyecto fue de convertir a los victimarios en víctimas. La "victimización" se esperaba, generaría una reacción mundial que presionaría a los vencedores de la guerra armada a prescindir del poder. Y establecido el espacio, la tarea usurpadora daría, en territorio nacional, un nuevo ímpetu.

El tema de los "desaparecidos" resulto una genial componenda, dentro de una instrumentación muy bien elaborada, para facilitar el camino al poder. En léxico político el acto de "desaparecer" a alguien consiste en la detención y ejecución, sin juicios y extraoficialmente, de un opositor, real o imaginario

Sí. Incuestionablemente, hubo desapariciones en la Argentina. Por supuesto que no los números bombásticos e hiperinflados ofrecidos por sus partidarios. Cifras serias varían entre 4000 y 7706. Tarea complicada por la constante "reaparición" de personas consideradas "desaparecidos", sin embargo viviendo y activos en Europa, América Latina y los ex -países socialistas. Indemnizaciones posteriores a familiares, asegura que los números nunca ascenderán a proporciones realísticas.

La práctica sistemática de detener y ajusticiar combatientes, sin revisión jurídica, se llevó a cabo por gobiernos argentinos, democráticos y no-democráticos, durante la década del 70. Esta actividad recrudesció con la intervención castrense de 1976 y duro hasta 1979. Sin embargo, las desapariciones pre-golpe militar, no parece haberles preocupado mucho. Esto ha sido una omisión estratégica.

Las autoridades públicas argentinas, empleando la mecanización de aprehender y matar extraoficialmente a las capturadas fuerzas subversivas, pusieron fin a la guerra. La contraofensiva lanzada por el gobierno, y el régimen militar en particular, neutralizó la búsqueda armada del poder por los marxistas. Sus integrantes y simpatizantes desertaron la vía armada y optaron por medios de mecanismos operantes en sociedades abiertas (las mismas que aniquilarían si llegaran al poder).

El nuevo campo de batalla fue la opinión pública internacional. Nada más fácil que victimizar al que perdió la guerra. No importa si fueron los que la empezaron. La intensa campaña de victimización necesitaba de "víctima" y "villano". Los que escaparon al exterior con el comunismo internacional y sus cómplices de la izquierda, coreografiaron la embestida psicológica espectacularmente.

Como metodología sería obligado descontextualizar la historia .La practica de descontextualizar es una mentira astuta. De esa forma habría un claro "villano". Extirparon, del largo proceso de lucha antisubversiva, el periodo

después del golpe militar de 1976, ignorando 21 años previos de constante enfrentamiento bélico a las fuerzas antisistemas. Así se desarrolló la temática de los "desaparecidos". El descarado arte de descontextualizar, de hacer un paréntesis de sólo un tramo de historia y pretender que no tiene vinculados orgánicos, de hacer creer que toda la violencia surgió a partir del golpe castrense y que ellos (los insurgentes) "respondían" a dicho acto, fue hecho posible sólo por la desinformación, la aptitud de la ignorancia y/o el acondicionamiento ideológico.

Maniobrando artificiosamente por canales legales e instituciones legítimas, lograron esquivar la atención de su pasado criminal. Organizaciones serias, particularmente de derechos humanos, engatusados, canonizaron a grupos, que hasta días previos habían cometido actos de la misma envergadura de la que estaban ellos ahora señalando. El fiasco de las Malvinas retornó a la Argentina a la democracia. Comenzó en ese momento la mutilación del acomodamiento de la legalidad para satisfacer su agenda ideológica.

La victoria electoral de Raúl Alfonsín, político de la Unión Cívica Radical (UCR) y antiguo abogado de Mario Santucho, notorio terrorista jefe del ERP, extendió la contienda publicitaria a territorio argentino. La finalidad de socializar a la Argentina encontró un comodísimo entorno facilitado por la administración de Alfonsín. La vía de una legalidad parcializada e ideológicamente dirigida, fue puesta en práctica de forma inmediata. El decreto No. 158/83 institucionalizó la descontextualización histórica y jurídica. Esta orden ejecutiva criminalizó lo cometido durante la guerra, mayoritariamente sólo por un bando (las fuerzas públicas) y por un período específico (durante el régimen militar). Los 359 desaparecidos de 1975, los 549 del primer semestre de 1976 y todos los cometidos por la Triple A, la banda paramilitar de Perón (Juan D.), no les interesó a los inquisidores partidistas. Era obvio que la lupa oficialista no tendría ni un remoto interés, en indagar sobre las atrocidades incurridas por los ex-combatientes revolucionarios.

La estrategia de las desapariciones selectivas recibió oficialidad doméstica con el decreto No. 187/83. Esto estableció la CONADEP, comisión comprometida copiosamente con los propósitos de los ex-insurgentes. Este instrumento lleno de errores, omisiones y falsedades sirvió de base para la "justicia" alfonsinista. Al rato comenzaron los juicios a los militares que pararon la guerra marxista armada.

El gobierno de Alfonsín obtuvo, para los terroristas marxistas argentinos, sus partidarios y la izquierda radical, impresionantes logros. Ofreciendo el podium de un régimen democrático, "legitimizó", ante la opinión pública, las quejas de los vencidos subversivos y encubrió sus bárbaros crímenes. Para la mayoría de los argentinos el emprobecimiento, bajo su mandato, no sólo fue moral y cultural.

En su afán por socializar al país, Alfonsín casi destruye a la Argentina. Habiendo estatizado, para 1985, la mitad de los medios de producción nacionales, el crecimiento económico, la productividad, el poder adquisitivo y los salarios reales estaban desplomados. Lo que estaba en ascenso eran los precios, la delincuencia, el desempleo real y la inflación. Este último a niveles carnavalescamente altos, que castigó con mayor severidad a los más necesitados. A pesar de las generosas concesiones concedidas por Alfonsín a los marxistas y la inmersión socializadora de su gesta, los conspiradores parecen no haber estado satisfechos.

Fiel a sus prédicas doctrinales, los comunistas bélicamente retomaron la ofensiva atacando, en 1989, el regimiento militar en La Tablada. Fue, como campaña militar, desastrosa para los comunistas. Las fuerzas públicas lograron enseguida aplastar el ataque. Defendiendo la nación y repelando el cobarde asalto, murieron más de 10 argentinos, incluyendo el Mayor Fernández Cutiellos asesinado por un balazo al rostro, sólo después de habersele cortado la lengua y los testículos. Tristísimamente, antes de concluir la próxima década, los asesinos comunistas estarían caminando libres por las calles.

La ascensión de Carlos Saúl Menem marcó una obstaculización para los propósitos de lograr una Argentina, socialista y montonera. No obstante la innegable corrupción (problema no-partidista argentino), concesiones empresariales selectivas, gasto público excesivo y acuerdos nublosos políticos, los avances socialistoides en el ámbito político, cultural y legal alcanzado, cortesía de la previa administración, fueron retrocedidas. El esquema cuasi-liberalizador, el acercamiento con los EE.UU., la condena al castrocomunismo en foros públicos y el indultar a los partícipes de la guerra, de ambos lados, en búsqueda de una reconciliación nacional, descarriló, momentáneamente, el ímpetu marxista en la Argentina.

Lamentablemente, los vínculos de Menem con el peronismo y su maquinaria socio-política, las reformas antiestatistas estructurales, incompletas y mediatizadas, atrofiaron el potente despegue argentino de los pantanos de la contracultura socialista. Los que vinieron después, no sólo continuaron la incorrecta lectura y mal aplicación del libreto liberal, sino le ofrecieron a las fuerzas conspiradoras su más grande oportunidad, para alcanzar el poder, en una década.

El léxico político se degradó a niveles vergonzosos. Culpando a potencias extranjeras, sus instituciones y modelo económico, en vez de la ineptitud de los políticos criollos que no supieron administrar la impresionante riqueza adquirida y controlar el despilfarro público, resurgió la premisa de invitar al estado a ampliar su poder, achacando, calumniosamente, a un paradigma teórico que nunca se practicó.

Rápido se movilizaron los movimientos antisistemas para quebrar el orden democrático y desvirtuar la concordia política. La expresión del descontento social fue secuestrada por extremistas que decidieron redefinir "democracia". Fernando De La Rúa, con su renuncia, les dió a las turbas y sus secuaces, un nuevo formato para alcanzar el poder. A este, aún el acto de conmutar la sentencia de los atacantes a La Tablada, poco le sirvió para ser perdonado por el imperdonable suceso, para la izquierda radical, de condenar al régimen castrista en los procedimientos de los DD.HH. de la ONU. Esto a pesar de tener Cuba la infame insigne de ser el país con la mayor cantidad de presos políticos, per cápita, en el mundo y ser un fiel y consistente practicante de la tortura sistemática.

Políticos como Eduardo Duhalde, uno de los presidentes interinos, volvió a la inescrupulosa rutina de rehusar depositar el voto argentino en la digna columna de naciones que condenaron a Cuba comunista en la ONU. Sin lugar a dudas, gestos como ese, la excarcelación de connotados terroristas, como Gorriarán Merlo (el acto de cierre del mandato duhaldista) y la extensión del clientelismo ideológico, dejó claro que la locomotora marxista se había, nuevamente, encarrilado. Así concluyó el quinto periodo de la lucha revolucionaria por el poder argentino.

La nueva metodología de victimizar a los agresores desvirtuando la historia para así institucionalizar la contracultura (requisito de premisa marxista), amparadas por una legalidad partisana (táctica de lucha ejercida por los marxistas argentinos después de su derrota en el campo bélico) encontró, en la ascensión de Néstor Kirchner, su "raison d`etre" y marca el sexto y actual periodo de la sitiada comunista (2003-presente).

Con el 22% del voto popular (la más baja en la Argentina), arribó Kirchner al poder. En un "caballo de Troya", por la puerta de una debilitada democracia, se insertó el montonerismo en la cúpula estatal argentina. Lo que no logró las bombas, los asesinatos, los secuestros, las torturas (el terror en general), lo posibilitó la maquiavélica estrategia adoptada al concluir la contienda armada.

Dos fenómenos de la modernidad han hecho fácil la adquisición del poder por elementos radicales. El primero es la inclusión de la propiedad privada, amedrentada y cooptada, a la praxis socialista. La segunda es la empleomanía de la democracia misma, como sistema para arribar al poder. El comunismo es un fin, no un medio. Para alcanzar esa utopía, el modo operativo es implantar el autoritarismo para después, dependiendo en la extremidad de los propósitos, si es necesario, ejercer el totalitarismo. La metamorfosis que ha dado el marxismo al incorporar variantes del capitalismo, i.e., capitalismo concesionario, mercantilismo, etc., tolerando esquemas de propiedad privada para así alistarlos, en concepto y práctica, en sus nociones de relaciones de producción (así lo explicó Deng Xiao Peng en 1978 y practicó Lenin en 1921), allanó el camino doctrinalmente para socialistas como Kirchner. Al establecer terrenos grises, la veracidad de las

intenciones ha sido más fácil de ocultar. Adicionalmente, la incapacidad del socialismo de resolver las necesidades de sus habitantes, ha engendrado una relación de dependencia irremediable con el capitalismo. Es esta condición de parasitismo empedernido, la que obliga la tolerancia de la propiedad privada, aún cuando, dogmáticamente, la desprecia.

La utilización del foro democrático, para llegar a la cúpula gobernante, es el segundo factor. Típicamente encarando dificultad de tomar posesión del gobierno por las armas, el camino por vías democráticas, es otro método de adueñarse del estado. Así lo hizo Hitler y el Nacional Socialismo. El monopolizar el poder es la meta. Los obstáculos son la sociedad civil y la oposición. Sin duda de que este proceso de consolidación de poder, cuando la dictadura en formación parte de la democracia, se hace más difícil. Lastimosamente, este fenómeno se está repitiendo con demasiado frecuencia. Los marxistas en la Argentina, desde el 25 de mayo del 2003, con un ex-montonero presidente gobernando desde la Casa Rosada, en ese afán están.

La toma de posesión de Kirchner contó con las figuras más predilectas de la izquierda radical. Ahí estaba el tirano-en-jefe, Fidel Castro, recibiendo la distinción de concretar la más prolongada reunión con el nuevo mandatario. Su discípulo, Hugo Chávez, también rozó los codos con el homenajeador. Esta cuasi-cumbre de terroristas, dictadores, sus apologistas y papagayos no fue un mero "show" publicitario, como algunos ilusos sugirieron. Kirchner rápidamente demostró la seriedad de sus convicciones.

Antiguos montoneros desbordaron el gabinete kirchneriano. Rafael Bielsa recibió la Cancillería; Carlos Kunkel se le asignó la Subsecretaría de la Presidencia; Enrique Albistur se le encomendó la Secretaría de Comunicación; Eduardo Sigal fue hecho Subsecretario de Integración Americana; Eduardo L. Duhalde fue nombrado Secretario de Derechos Humanos; Juan Carlos Dante Gullo, asesor presidencial; Jorge Taiana sería nombrado Secretario de Relaciones Exteriores; Patricia Vaca Narvaja recibiría la Secretaría de Defensa del Consumidor; Juan González Gaviola se le asignó el ser interventor del PAMI; Carlos Bettini, embajador en España; y más reciente, la Ministra de Defensa Garré. Todos ex-montoneros y ex-montoneras. Con esta composición estructural, claro quedó, que en este régimen la hegemonía sería montonera.

Los mecanismos con la capacidad de frenar o destruir los proyectos de la nueva administración de ex-subversivos, rápidamente fueron enfrentadas. Las Fuerzas Armadas, de inmediato, vieron a 52 altos jefes extirpárseles el mando. Nuevos oficiales con afines ideológicos o debilidades oportunistas fueron colocados. Los servicios de inteligencia, necesarios para defender una nación moderna, fueron fatalmente debilitados. Opositores, para los marxistas, no son sólo los reales, sino también los imaginarios y potenciales. Una campaña calumniosa de desprestigio (mayor que las de antes) fue

instaurada. Una serie de legalidades, trampas y reinterpretaciones, fueron despachadas para suplementar las medidas planadoras.

Decretos con precedentes establecidos, como la Obediencia Debida y Punto Final, diseñados para sanar las heridas de una guerra difícil, fueron revertidos. La intención era clara, en adición al ánimo vengativo, Kirchner fortaleció el propósito de domesticar a la institución con la mayor posibilidad de bloquear la marcha al despotismo. La intención es el ablandamiento suficiente para que los uniformados respondan, no a la Patria, sino al Partido.

Propagandísticamente, la contracultura que el montonero ha luchado para institucionalizar, requiere la alienación de las FF.AA. La premisa oculta de derogar la prohibición de extraditar oficiales argentinos a terceros países, obedece al claro objetivo de amedrentar las fuerzas castrenses enlistando, por medio de la complicidad internacional, a jueces marxistas dispuestos a enjuiciar extranjeros. Paradójicamente teniendo estos en su propio patio terroristas como Santiago Carrillo para encarcelar, sujeto que ordenó la masacre de más de 5,000 personas, en menos de tres meses, durante la Guerra Civil Española. Este desmembramiento psicológico, pretende inculcar el terror dentro del ejército.

La monopolización del poder requiere una intolerancia con, no sólo opositores, sino también disidentes. El estado argentino al ser el mayor empleador singular, la tarea de castigar, amenazar o premiar, juega perfecto con las pretensiones dictatoriales de Kirchner. Un ejemplo fue el despido masivo de aliados de Daniel Scioli, cuando el vicepresidente cuestionó la "seriedad" del nuevo régimen. La expulsión del Dr. Sánchez Herrera, Procurador del Tesoro, por haber representado legalmente al General Juan Bautista Sasiain, es otro ejemplo (el primero perdió el padre y el segundo, la hermana, en actos terroristas). Esto es un descaro olímpico, cuando su ministro de, nada menos que, la secretaría de derechos humanos, no sólo es un ex-terrorista, sino fue el representante legal de Mario Santucho, asesino fundador(mencionado anteriormente) del ERP, encausado por el secuestro, la tortura y el asesinato de Sallustro, gerente de Fiat.

La rama judicial es hoy un simple adorno, que el régimen montonero usa para sellar sus deliberaciones internas, enmascarando la casi completitud de su poder. La noción toqueviliana de "separación de poderes" es, en la Argentina actual, un espejismo. Jueces cumpliendo sus funciones, que no han coincidido con la administración socialista, particularmente en el Tribunal Supremo, por medio de la intimidación o amenaza directa, han renunciado, sido despedido o cooptados. En su lugar nuevos jueces, adeptos al fundamentalismo montonero, han sido colocados. Listos para repartir "justicia revolucionaria". Este peligrosísimo acontecimiento facilita la solidificación absolutista del régimen kirchneriano, al poder este definir y prescribir lo que es "legal" y "constitucional".

Con la subordinación de la rama judicial, la práctica de la censura se ha elevado a proporciones alarmantes. Terminología jurídica como “predica golpista”, “apología del delito” y “Protección del Orden Constitucional”, han sido adjuntadas a los códigos legales de la Argentina de hoy. Ninguna, si verdaderamente hubiera un sistema judicial competente, sobrevivirían, en una genuina democracia, escrutinio.

Lograda la esterilización de las Fuerzas Armadas y las Cortes, la tarea de desintegrar la sociedad civil se simplificó. Teniendo la capacidad para “legalizar” y enforzar el ostracismo al que promueve y la inhabilidad para revertir la inconstitucionalidad de dicha acción, libertades elementales, se han ido desapareciendo. El efecto es el de una censura de terciopelo. La población en masa, quebrada ante la intimidación, desiste de enfrentamientos efectivos y directos contra el régimen kirchneriano. Organizaciones de fachadas, establecidas para dar la imagen de “apoyo popular” y servir de fuerzas de choque para contrarrestar descontento social, son las patrullas ideológicas de los montoneros. Los piqueteros, movimientos radicales y sindicatos cooptados son algunas de las estructuras que sirven de pantalla para el exterior y agentes atemorizadores para el intramuros.

Medios de información integralmente comprometidos con la oficialidad socialista, se ocupan de lidiar el abatimiento contra la Iglesia y toda denominación no-tercermundista. Propagandistas ligados al gobierno kirchneriano descargan su plomo incesantemente para propagar el descrédito hacia instituciones que abrazan la creencia en Dios. Emplean todo el peso de la prensa servil buscando enraizar, culturalmente, el ateísmo. Censuran, ridiculizan, aíslan e intimidan para imponer un precio social a la sociedad argentina, por creer y adorar al Ser Supremo. El ateísmo fundamentalista que condiciona el comunismo, prescribe, sin equívoco, dicha proposición. La pseudo-religión que es el marxismo hace irreconciliable su coexistencia con una Iglesia vibrante e indispueta a ser cómplice. Verbitsky, el Goebbells argentino, y tantos otros al servicio del régimen montonero, lo saben muy bien. Por eso, tan despiadadamente, la combaten.

El agrandamiento explosivo del sector público que se ha llevado a cabo en los últimos tres años, forma parte de la esquematización elaborada para automatizar a la sociedad civil. La estatización de la Argentina es, en su máxima expresión, el arribo a la nirvana del colectivismo. Más poder para el estado viene a la expensa del individuo. La concentración de la economía en manos pública no se traduce en un enriquecimiento del “pueblo”. Esa mentira se la han vendido cínicamente. El “pueblo” no se convierte en dueño de nada, permanece marginado de las decisiones y está, netamente, a la merced de lo que hay en el almacén de ideas, dentro de la cabeza de los que controlan el poder.

Una democracia, para ser genuina, requiere pluralismo. La descentralización del poder, político y económico, son firmes barreras para prevenir el despotismo. La soberanía de una sociedad reside, no con los que gobiernan,

sino los gobernados. Por eso, con ímpetu frenético, busca, esta administración, la grandilocuencia reguladora que otorga un estado predador y de esa manera, concretar su hegemonía sobre el detalle de vida de cada argentino. Mecanismo, maravillosamente perverso y prerequisite, para implantar la meta por la cual vienen luchando desde 1955: una Argentina marxista-leninista.

En estos momentos las instituciones públicas más capaces de impedir la comunización: las FF.AA. y el Tribunal Supremo; están defenestrados. La oposición política permanece desorganizada. Del lado civil, la Iglesia está asediada por la contracultura oficialista y, exceptuando nobilísimas excepciones, parece preferir esperar por el desarrollo de los acontecimientos. El sector privado, el motor verdadero capaz de producir riqueza, cada vez está más regulada y espantada. La única señal de liberalización es la licencia impune dada a los delincuentes, muchos bajo nómina estatal.

¿Tiene legitimidad este gobierno para hacer lo que están haciendo? Que en su primer elección haya ganado con el 22% del voto y 39.5% en la segunda, deja duda, si es que se cree en el concepto del voto mayoritario. Las turbas contratadas son la cara que el montonerismo presenta ante esta incógnita. Quieren hacer creer que "turbacracia" y "democracia" son sinónimos.

¿Está todo perdido? No. Depende de los argentinos romper el silencio y no seguirle el juego a esta dictadura en construcción. La dinastía kirchneriana ya se está maniobrando. El clientelismo, por medio de la despenalización y tolerancia delictiva, augura incrementar sus números. Sin embargo, el montonerismo tiene vulnerabilidades. La fragmentación dentro del justicialismo es buena. El canibalismo político que se ejerce dentro del partido de Perón, obstaculizará la consolidación que busca el régimen montonero. La disidencia dentro de esas filas, se debe estimular. Políticos opositores deben de priorizar lo que los une: frenar la avalancha marxista. Alianzas de amplio espectros, deben de coordinarse.

Más importante de que se llegue al poder por la vía democrática, es que se gobierne democráticamente. La pluralidad, hoy brillando por su ausencia en la Argentina, puede ser vigorizada al concientizar la sociedad el peligro y movilizarse en oposición a mayores transferencias de poder al ejecutivo montonero. En elecciones, premiar a candidatos que abrasen la cultura de la libertad, en vez del estatismo y la dependencia, y utilizar el espacio que queda, para reclamar la soberanía popular perdida. La sitiada marxista ha estado en pie. Hoy están en el poder, pero todavía no han monopolizado todos los sectores de la sociedad argentina. La lucha sigue y se puede ganar. El dogma socialista no frena su avance, aún ante la pared empírica, que evidencia la demencialidad de su práctica. Quiera Dios que Argentina se salve de tan malvado experimento.